



Roj: **STSJ CAT 3849/2022 - ECLI:ES:TSJCAT:2022:3849**

Id Cendoj: **08019330022022100295**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **2**

Fecha: **27/04/2022**

Nº de Recurso: **1288/2021**

Nº de Resolución: **1499/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JAVIER BONET FRIGOLA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJCA, Barcelona, núm. 7, 15-02-2021 (proc. 14/2017),  
STSJ CAT 3849/2022**

## **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

#### **SECCIÓN SEGUNDA**

Recurso de apelación SALA TSJ 1288/2021 - Recurso de apelación contra sentencias nº 242/2021

Partes: Custodia , Juan Pablo , Delfina , Victor Manuel , Eloisa Y Emilia

C/ AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

**S E N T E N C I A Nº 1499/2022 - (Secció: 291/2022)**

**Ilmos. Sres. Magistrados:**

**Don Jordi Palomer Bou**

**Don Javier Bonet Frigola**

**Doña Capilla Hermosilla Donaire**

En la ciudad de Barcelona, a **27/04/2022**

**VISTOS POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCIÓN SEGUNDA)**, constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 242/2021, interpuesto por Custodia , Juan Pablo , Delfina , Victor Manuel , Eloisa y Emilia , representado por el Procurador de los Tribunales IGNACIO DE ANZIZU PIGEM y asistido de Letrado, contra AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representada y defendida por el ANGEL QUEMADA CUATRECASAS.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Javier Bonet Frigola , quien expresa el parecer de la Sala.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** El Juzgado Contencioso Administrativo 7 Barcelona dictó en el Procedimiento Ordinario nº 14/2017, la Sentencia nº 45/2021, de fecha 15 de febrero de 2021, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "**DESESTIMAR** el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Custodia , Emilia Y Delfina , Victor Manuel , Eloisa Y Juan Pablo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, adoptado en sesión de 29 de septiembre de 2016, por el se acuerda la inadmisión de las solicitudes de expropiación por ministerio de la ley; acto de se declara ajustado a Derecho. Sin costas."



**SEGUNDO.-** Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante Custodia , Juan Pablo , Delfina , Victor Manuel , Eloisa Y Emilia y apelada AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC.

**TERCERO.-** Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 20 de abril de 2022.

**CUARTO.-** En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Por la representación procesal de Custodia , Emilia , Delfina , Victor Manuel , Eloisa y Juan Pablo , se ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 15 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por los apelantes contra las Resoluciones del Pleno del AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC de fecha 29 de septiembre de 2016, por las que se declaró la inadmisión a trámite de las solicitudes de inicio de expediente expropiatorio por ministerio de la ley de las fincas situadas en la CALLE000 , NUM000 y CALLE000 , NUM001 , en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

**SEGUNDO.-** En el recurso de apelación interpuesto, los apelantes, aducen como motivos de impugnación los siguientes:

- a) Falta de motivación de la Sentencia apelada.
- b) Afirman que no procedía la inadmisión de sus solicitudes sino, en su caso, su desestimación por motivos de legalidad.
- c) Anulabilidad del Acuerdo de 29-9-2016, por cuanto la solicitud ya debía entenderse estimada por silencio administrativo positivo.
- d) Nulidad del Acuerdo de 29-9-2016, por revocar un acuerdo anterior declarativo de derechos (el de 26-3-2015), sin acudir a la vía de la revisión de oficio o a la declaración de lesividad, o por revocar aquel Acuerdo por motivos de simple oportunidad y sin prever una indemnización para los afectados.
- e) En relación con las causas de inadmisión, y tras repasar las características de la expropiación forzosa por ministerio de la ley, y su carácter tuitivo del derecho de propiedad, considera que, en relación con la finca sita en CALLE000 , NUM002 , que el importe anual percibido por los carteles instalados no justifica la aplicación del artículo 114.4.d del TRLU; y en cuanto a la finca del nº NUM001 , recuerda que ya quedó probado que la edificación de PB+2P se encuentra fuera de la zona calificada como 6b y está calificada con las claves 13b(zona en densificación urbana semiintensiva) y 15 (zona de conservación de la estructura urbana y edificatoria), no siendo objeto del expediente. Y en cuanto al resto de construcciones (cobertizos o almacenes), no considera acreditado que se encuentren en uso y recuerda que los técnicos municipales no han efectuado ninguna visita a la parcela.

Por su parte, el AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, afirma que la Sentencia apelada suficientemente motivada y recuerda que recoge sus argumentaciones. En segundo lugar, considera probado en el proceso de instancia que en las fincas objeto de controversia existen construcciones susceptibles de ser utilizadas o de producir un rendimiento económico a sus propietarios. Recuerda que tras la formulación de la advertencia de inicio del expediente expropiatorio por ministerio de la ley, el cómputo de sus plazos quedó suspendido, y finalizada la suspensión se inadmitió la solicitud formulada. Finalmente, niega cualquier tipo de error en la valoración de la prueba por parte del Juzgado de instancia.

**TERCERO.-** En cuanto a la pretendida falta de motivación de la Sentencia de instancia, es evidente que la misma no concurre.

El Tribunal Supremo, ha dicho en su Sentencia de 14 de diciembre de 2007, recordando la de 26 de septiembre de 2005, que:

*"a) La motivación sólo puede entenderse cumplida, cuando se exponen las razones que motivan la resolución y esa exposición permite a la parte afectada conocer esas razones o motivos a fin de poder cuestionarlas o desvirtuarlas en el oportuno recurso, pues lo trascendente de la motivación es evitar la indefensión y ésta, ciertamente, se ocasiona cuando el Tribunal deniega o acepta una petición y la parte afectada no sabe cual ha sido la razón de su estimación o denegación.*

b) No tiene la consideración de defecto de motivación el eventual error que pueda producirse en la apreciación de los hechos, en la valoración de la prueba o en la interpretación y aplicación de las normas -sin perjuicio de que ello pueda dar lugar a distinto motivo de casación por la vía del artículo 88.1.d) LJCA.- salvo que se alegue y se demuestre que el Tribunal de instancia ha procedido de manera ilógica o arbitraria ( SSTS de 11 de marzo , 28 de abril , 16 de mayo , 15 de julio , 23 de septiembre , 10 y 23 de octubre y 7 de noviembre de 1995 , 23 y 27 de julio , 30 de septiembre y 30 de diciembre de 1996 , 20 de enero , 23 de junio , 22 de noviembre , 9 y 16 de diciembre de 1997 , 20 y 24 de enero , 14 y 23 de marzo , 14 y 25 de abril , 6 de junio , 19 de septiembre , 31 de octubre , 10 EDJ 1998/30852 y 21 de noviembre EDJ 1998/30916 y 28 de diciembre de 1998 EDJ 1998/36372 , 23 y 30 de enero de 1999 EDJ 1999/2015).

c) La exigencia constitucional de la motivación de las sentencias , recogida en el artículo 120.3 en relación con el 24.1, de la Constitución , aparece justificada, sin más que subrayar los fines a cuyo logro tiende aquella, que, ante todo, aspira a hacer patente el sometimiento del Juez o Tribunal al imperio de la Ley y contribuye a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y la corrección de una decisión judicial, facilitando el control de la sentencia por los Tribunales Superiores, y opera como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad.

d) La amplitud de la motivación de las sentencia ha sido matizada por la doctrina del Tribunal Constitucional, indicando que no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales fundadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquella ( sentencias del Tribunal Constitucional 14/1991 , 28/1994 , 145/1995 EDJ 1995/5505 y 32/1996 , entre muchas otras). Así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional cuando se refiere a que no es necesario un examen agotador o exhaustivo de las argumentaciones de las partes, y cuando incluso permite la argumentación por referencias a informes u otras resoluciones. La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 122/94 de 25 de abril , afirma que ese derecho a la motivación se satisface cuando la resolución judicial de manera explícita o implícita contiene razones o elementos de juicio que permiten conocer los criterios que fundamentan la decisión."

Teniendo en cuenta la anterior doctrina y partiendo de una lectura atenta de la Sentencia apelada, apreciamos como la misma se encuentra suficientemente motivada y da respuesta a los motivos de impugnación esgrimidos por la parte en la instancia. Por otra parte, la propia parte apelante, con un recurso coherente y completo, en el que estudia uno por uno los aspectos a los que da respuesta la Sentencia del Juzgado, demuestra haber comprendido la misma perfectamente, sin que se atisbe la más mínima indefensión por la causa aducida. Por ello, el motivo de apelación debe ser rechazado.

**CUARTO.-** En segundo lugar, plantea la actora que no procedía la inadmisión de sus solicitudes sino, en su caso, su desestimación por motivos de legalidad.

Para resolver la cuestión planteada debemos partir de la premisa de que la expropiación por ministerio de la ley, no es más que un modo especial de iniciar el procedimiento expropiatorio, que, una vez producido, lleva a las partes a los trámites previstos en el Capítulo III de la LEF. Así se desprende con toda claridad del artículo 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Catalunya, cuando en su apartado primero nos dice que:

"Una vez transcurridos dos años desde que se haya agotado el plazo establecido por el programa de actuación urbanística o la agenda de las actuaciones a desarrollar, o cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística municipal, cuando este no establece el plazo para la ejecución de la correspondiente actuación urbanística, si no se ha **iniciado** el procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del plan de ordenación urbanística municipal, deban ser necesariamente de titularidad pública y que no estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, los titulares de los bienes pueden **advertir a la administración competente de su propósito de iniciar el expediente de aprecio**. Si transcurren dos años desde la de la advertencia y la administración no ha dado respuesta, los titulares de los bienes pueden **presentar la hoja de aprecio**." (la negrilla es nuestra).

Por tanto, la "advertencia" presentada, en nuestro caso por los apelantes, no es más que un "propósito" de iniciar el expediente de aprecio que tendrá lugar con la presentación ulterior, cumplidos los plazos y requisitos del precepto que examinamos, de la hoja de aprecio.

En el supuesto de Autos, la Administración consideró que los terrenos de los apelantes no reunían los requisitos necesarios para tener acceso a dicha modalidad procedimental del instituto expropiatorio, por lo

que, correctamente, siempre según su lógica, -que más adelante veremos es correcta-, inadmitió las solicitudes o "advertencias" formuladas por los recurrentes, mediante Acuerdos de 29 de septiembre de 2016.

**QUINTO.-** Consideran también los apelantes, que los Acuerdos de 29 de septiembre de 2016, serían anulables, por cuanto la solicitud ya debía entenderse estimada por silencio administrativo positivo. Sin embargo, como bien dice la Sentencia apelada ello no tuvo lugar.

En efecto, los apelantes presentaron sus advertencias el 10 de enero de 2015, y el 26 de febrero de 2015 (BOPC de 10 de marzo de 2015), el AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC acordó al amparo del artículo 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de julio, entre otros extremos, la suspensión por plazo de un año, de los procedimientos de expropiación por ministerio de la ley contemplados en el artículo 114 del Decret Legislatiu 1/2010, en el ámbito en el que se encontraban las fincas de autos (folio 8 del expediente). Dicho acuerdo devino firme al no ser recurrido.

Transcurrido el plazo de suspensión, y antes de que transcurrieran los dos años que, según el artículo 114 del Decret Legislatiu 1/2010, permitirían a los solicitantes presentar su hoja de aprecio, previo informe jurídico, el Pleno del AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC adopta los Acuerdos de inadmisión de 29 de septiembre de 2016, impugnados ante el Juzgado, por tanto, sin que ningún supuesto de silencio positivo tuviera lugar.

Mención aparte merece la alegación sobre las consecuencias del Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2015, pues según los apelantes, sería causa de la nulidad del Acuerdo de 29-9-2016, por revocar un acuerdo anterior declarativo de derechos (el de 26-3-2015), sin acudir a la vía de la revisión de oficio o a la declaración de lesividad, o por revocar aquel Acuerdo por motivos de simple oportunidad y sin prever una indemnización para los afectados.

Nada de ello ocurre en el supuesto que nos ocupa, pues el Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2015, en momento alguno admite a trámite el procedimiento como pretenden los apelantes. En efecto, dicho Acuerdo, innecesario desde el punto de vista jurídico, es tributario del anterior de 26 de febrero de 2015, y lo único que hace es recordar algo que ya era evidente, y es que con la publicación en el BOPB de 10 de marzo de 2015 del Acuerdo de 26 de febrero de 2015, también quedaba suspendido el plazo para presentar hojas de aprecio para los solicitantes. Este último Acuerdo, en momento alguno se pronuncia sobre la admisión o inadmisión o inicio de tramitación del procedimiento solicitado, y no lo hace ni lo podía hacer por cuanto se aprobó durante el plazo de suspensión ya acordado.

Por tanto, ni existe admisión explícita o implícita, ni posterior revocación de oficio de un acto declarativo de derechos.

**SEXTO.-** Queda por examinar si la causa de inadmisión estaba justificada, o si se prefiere, era correcta, lo que es negado por los apelantes, que consideran que la Sentencia apelada incurre en error en la apreciación de la prueba en este sentido.

Antes de proseguir recordemos que la causa de inadmisión esgrimida por la Administración es la contemplada en el artículo 114.4.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agosto, según el cual lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicación a:

"d) Los terrenos donde haya construcciones o instalaciones en uso o susceptibles de ser utilizadas, ya sea para uso propio o para obtener un rendimiento económico".

La Sentencia apelada afirma que "Estas construcciones han quedado debidamente acreditadas a través del informe técnico municipal, sin que la parte actora haya desvirtuado esa prueba, es más, en la propia demanda se afirma que los carteles publicitarios reportan a la propiedad 4.000€ anuales (copia del contrato de alquiler, documento núm. 3 de la demanda), lo que supone un rendimiento económico puesto que el artículo no especifica de cuanto ha de ser el mismo, sino que la instalación sea susceptible de generar dicho rendimiento económico". Y efectivamente, en cuanto a la finca sita en CALLE000 , NUM000 , la propia parte apelante abundando en el acierto de la Sentencia del Juzgado, reconoce en su recurso que "nomès existeixen uns simples cartells publicitaris que ocupen un 5% de la finca", y que dichos carteles "reporten a la propietat un import anual de 4.000€, que distribuït entre els diferents propietaris de la finca -6 persones a parts iguals- significa un ingrés anual de 666,67€ per cadascun". Pues bien, lo anterior es suficiente para excluir la misma de la posibilidad ofrecida por el artículo 114.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pues como dice la Sentencia apelada dicha finca, en concreto los carteles existentes en la misma, comportan un rendimiento económico para la propiedad, sin que el precepto distinga que deba superar una determinada cantidad.

En cuanto a la situada en CALLE000 , NUM003 , la Sentencia apelada recuerda que "la propia parte reconoce la existencia de las construcciones, aunque las califique como dos "barracas" en deficiente estado de conservación, que hace años que no se destinan a ninguna actividad y en las que se pueden realizar

pequeñas obras de higiene, ornato y conservación". Y es de nuevo en el recurso de apelación en el que la parte vuelve a reconocer su existencia posibilidad de suministro de agua y electricidad, aunque afirme que no está probado que los suministros funcionen (pag 25 del recurso), y finalmente que los mismos fueron objeto de un expediente de regularización catastral durante el año 2014.

En relación con ello, de nuevo debemos acudir al artículo 114.4.d) del Decret Legislatiu 1/1994, y apreciar que meramente exige que las instalaciones, sean las que sean, sean susceptible de ser utilizadas por sus propietarios, sin exigir que lo sean efectivamente en dicho momento.

En definitiva, se daban en el caso las condiciones para no admitir la tramitación del expediente expropiatorio de justiprecio por ministerio de la ley, por lo que los Acuerdos de 29 de septiembre de 2016, eran plenamente ajustados a Derecho, con lo que se impone la desestimación del presente recurso de apelación.

**SEPTIMO.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 LJCA, procede imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso de apelación, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.3 LJCA, y teniendo en cuenta las características del presente procedimiento, las mismas se limitan a la cantidad de 2.000€.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

## FALLAMOS

**1º.- DESESTIMAR** el recurso de apelación formulado por Custodia , Emilia , Delfina , Victor Manuel , Eloisa y Juan Pablo , contra la Sentencia de fecha 15 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona.

**2º.- IMPONER** a la parte apelante las costas del presente recurso de apelación, si bien limitadas a la cantidad de 2.000€ por todos los conceptos.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art. 236 bis de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina judicial, donde se conservarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en donde serán tratados con la máxima diligencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al presente procedimiento, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado Don Javier Bonet Frigola , estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.